Imprimir

Desde distintas instancias, tanto en Estados Unidos como en Colombia, se viene especulando con un cambio radical en la política antidrogas por parte del nuevo gobierno norteamericano, en el marco general del denominado regreso de Washington a la escena internacional, en contravía de las tropelías, internas y externas, generadas por su problemático y díscolo antecesor.
Sueños amparados en que el viejo y maltrecho imperio cambiará sus procederes bajo el mandato del casi octogenario presidente Biden. Vana ilusión. Sin duda, a la Casa Blanca llegó otro estilo, y algunas de las medidas tomadas hasta ahora son de corte progresista y marcan una distancia con Trump, como el regreso de Washington al Acuerdo de Paris y a la Organización Mundial de la Salud.

O las políticas en el frente interno que pretenden tocar la epidermis de las mega fortunas, con las cuales pretende financiar su plan de reactivación económica en busca de salir del foso de su decadencia que, indudablemente tendrá efectos benéficos en la reactivación de la economía mundial. Un verdadero Plan Marshall por US$ 2.25 billones que, en opinión de Biden, “hará crecer la economía, nos harán más competitivos en todo el mundo, promoverán nuestros intereses de seguridad nacional y nos podrán rumbo a ganar la competición global con China en los próximos años”.

Pero en esencia, las agudas contradicciones de la geopolítica mundial y las pretensiones del presidente norteamericano de recuperar el terreno perdido con respecto a Pekín, su archí enemigo global, permanecerán inalterables y serán fuente de inestabilidad mundial y de posibles enfrentamientos militares en las zonas candentes de la escena política mundial: el mar del sur de China, Taiwán, Hong Kong, Corea del Norte, el Medio Oriente, Irán, que le recordarán al mundo, con estruendo, los atrabiliarios y viejos procederes de un imperio al que poco, muy poco, le han importado el multilateralismo, los derechos humanos, la paz, con tal de hacer prevalecer sus intereses estratégicos, en su ya largo reinado al frente de los destinos del mundo, liderazgo hoy fuertemente cuestionado en todos los frentes por los poderes emergentes. Estados Unidos no las tiene todas consigo.[1]

En este contexto, el narcotráfico será el pretexto para intervenir Venezuela vía Colombia, en un continente que ayer fue su patio trasero y en donde hoy China impugna duramente su supremacía. A esa grosera intervención, el gobierno colombiano se ha prestado y se seguirá prestando de forma irresponsable, colocando en riesgo la seguridad de la nación. Un escenario que no excluye un enfrentamiento militar entre los dos países, con consecuencias impredecibles, en una región del mundo donde los riesgos aumentan exponencialmente. Este ya no es un choque que puedan dilucidar las dirigencias de Venezuela y de Colombia en uso de una autonomía que nunca han tenido.

Las cartas están jugadas por distintas consideraciones estratégicas, o de sumisión. Colombia, provocadoramente del lado de los intereses norteamericanos y Venezuela, a los pies de China y Rusia, cuya crisis económica se profundiza cada vez más por sus propias y erráticas políticas, agravadas por el bloqueo a la que la tiene sometida Washington. Respaldo que tiene en pie al extravagante presidente Maduro.

Los ruidos de guerra aparecen de forma cada vez más frecuente y más peligrosa a ambos lados de la larga, delicada y porosa frontera, como ahora, cuando el gobierno venezolano toma partido por una de las facciones de las guerrillas colombianas, comprometidas con el negocio del narcotráfico y otros menesteres, que siempre han utilizado el territorio venezolano, con la benevolencia del gobierno bolivariano y la histórica incapacidad del gobierno colombiano para proteger sus fronteras. La situación es extremadamente delicada.

Diosdado Cabello ha afirmado, sin ambages, que, en caso de una agresión extranjera contra su país, la guerra se libraría en territorio colombiano. Venezuela es hoy una amenaza para la seguridad nacional de Colombia por cuenta de la guerra contra las drogas, la obsecuencia con los Estados Unidos y los enfrentamientos en la cúpula del poder mundial. ¡Gravísimo!

Es lo único que puede explicar, que en medio de la profunda crisis económica que ha generado la pandemia, con una población empobrecida en grado sumo, con ayudas económicas bastantes insuficientes para la gravedad de la crisis sanitaria, con un proceso de paz con graves problemas en su implementación por la falta de recursos y de una honda

crisis fiscal que le ha servido al gobierno de mampara para presentar al Congreso una reforma tributaria que pretende arrebatarles, a los sectores medios y a las clases trabajadoras del país, más de 17 billones de pesos, este tome la insensata decisión de comprar 24 aviones de guerra caza F16, por un valor de US$ 4.500 millones, que equivalen a 15 billones de pesos. Lo que equivale a financiar la agresión contra Venezuela con los impuestos de los colombianos más golpeados por la pandemia. ¡Aviones a la orden de los intereses generales de Washington, que no son los del país!

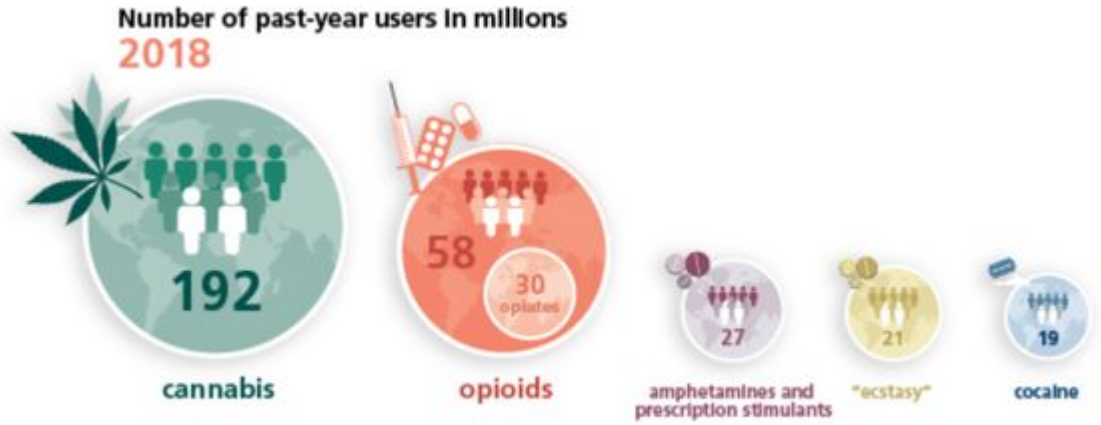
O la certificación al gobierno Duque como premio por su compromiso en la inútil guerra contra las drogas, fumigación con glifosato incluida, contrariando el discurso medio ambiental de Biden, o sus preocupaciones por los derechos humanos y por la paz, de lo que ha hecho gala, que ha llevado al Presidente, violentado el Acuerdo de Paz y pretermitiendo de manera grosera sendas restricciones constitucionales, a apurar su empeño de asperjar, con este comprobado veneno, las montañas colombianas.

Incluidas las que compartimos con los países vecinos, con las que ya hemos tenido dificultades por lo mismo. No hay lugar en Colombia donde se violen más los Derechos Humanos, se hostigue a la población, se generen desplazamientos forzados, se asesinen colombianos, especialmente jóvenes, se haga trizas el acuerdo de paz, que en las regiones cocaleras y periféricas. Esa genuflexión le costará sangre a los campesinos colombianos que defenderán con su vida su derecho a la subsistencia. Una revuelta social está a la orden del día, como ya se está viendo.

No es la cocaína la principal fuente de drogas que *meten* los consumidores problemáticos norteamericanos. Los opiáceos son, de lejos, el problema recurrente de la salud pública norteamericano relacionado con el consumo de drogas. La DEA reconoce, en su último informe, que las muertes por sobredosis derivadas del uso exclusivo de cocaína disminuyeron entre 2017 (6.701) y 2018 (6.007).

Para el 2020, se registran más de 81.000 fallecimientos por sobredosis, de junio de 2019 a mayo de 2020, situación exacerbada en el marco de la pandemia del Covid 19 por el uso de

opiáceos sintéticos con el Fentanilo a la cabeza, lo que representa la mayor cantidad jamás registrada de muertes de este tipo en un año en EU.[2] Estos patéticos resultados reflejan fehacientemente el enfoque imperial de solo atajar la oferta, en perjuicio de los países productores, mientras relajan la vigilancia y el cuidado dentro de sus fronteras.



Fuente: Informe mundial de drogas. Unodc 2020.

Enormes dificultades en el frente externo y en el frente interno le esperan al país por causa de la guerra contra las drogas que se intensificará con el nuevo jefe de la Oficina Oval y sus pretensiones de recuperar la ruta de la hegemonía norteamericana a escala global y en este espacio del mundo. El narcotráfico, las drogas, como recursos de intervención en los países que no les son afectos, es utilizado en esa función. Biden no nos cayó del cielo.[3] Al contrario, del cielo de Biden y de Duque lloverá glifosato, oscureciendo aún más, el inquietante panorama nacional.

Nada va a cambiar en lo fundamental en este complicado horizonte. Con seguridad, Washington va a limar su postura en relación con la marihuana, la droga de mayor uso del mundo y el mayor y más floreciente negocio del sector agrícola de la economía norteamericana. Ante semejante evidencia no es descartable la aprobación de su uso recreativo a nivel federal, una promesa de campaña. Pero de las propiedades de esa mata no derivan nuestros problemas. Biden mantendrá, sin variación alguna su postura

prohibicionista en relación con la cocaína, como lo ha hecho a lo largo de su dilatada carrera política.[4]

Juan González, el colombiano asesor de Joe Biden para Latinoamérica vino en función exclusiva de detener la creciente influencia China en la región. Su primera parada fue Bogotá. Y Venezuela fue el centro de las conversaciones. La guerra contra las drogas es funcional a ese objetivo.

Hasta ahora, ningún gobierno estadounidense ha reconocido los contundentes indicios de que la guerra contra las drogas ha fracasado por completo y no ha logrado ninguno de sus objetivos. Biden tampoco lo hará. Y la confrontación con Venezuela podría adquirir ribetes dramáticos. Estos delicados y trascendentales asuntos deberían ser objeto de serios e informados debates en la campaña presidencial que se adelanta. El país debería buscar con ahínco, en alianza con los países productores, sus propias respuestas normativas[5] que aleje del horizonte esta pesadilla que compromete el presente y el futuro de varios de nuestros países.

---

[1] *Estados Unidos ha vuelto, pero ¡hasta qué punto?* El Tiempo, 28 de febrero de 2021, Pág. 2.4.

[2] Ricardo Vargas, *Narcotráfico, poder mafioso y democracia en Colombia*, ¡Hay una salida? Revista Sur, Bogotá, 2021.

[3] Entrevista a Sergio Jaramillo. *El gobierno de Joe Biden nos cae del cielo*, El Tiempo, 24 de enero de 2021, Pag.1.11.

[4] *El Plan Colombia de Joe Biden,* El Espectador, 13 de enero de 2021, pág. 38

[5] Cesar Gaviria Trujillo, *Hora de ponerle fin a la eterna guerra contra las drogas de Estados Unidos,* El Tiempo, 28 de marzo de 2021.

Fernando Guerra Rincón

Foto tomada de: https://r1.abcimg.es/